

LA PANDEMIA Y LAS ACTITUDES HACIA EL ESTADO DEL BIENESTAR

Miguel Caínzos y Carmen Voces

Universidad de Santiago de Compostela

[Capítulo del libro *Sociología en tiempos de pandemia*, editado por Olga Salido y Matilde Massó. Colección Investigación Sociológica. FES – Marcial Pons]

INTRODUCCIÓN

En España, como en otros países, el Estado ha respondido a la crisis sanitaria y económica originada por la COVID-19 con una gran movilización de recursos y una extraordinaria intensificación de su intervención en la vida social. La pandemia ha tensionado las estructuras del Estado del bienestar, poniendo a prueba su efectividad y su capacidad de adaptación y sacando a la luz tanto las virtudes como las debilidades de la red pública de protección social. Dedicaremos este capítulo a comprobar si todo ello ha modificado de modo sustancial las actitudes de los ciudadanos españoles hacia el Estado del bienestar y los servicios públicos.

Es sabido que, en general, los españoles esperan que el Estado asuma un papel muy activo en el aseguramiento del bienestar de los ciudadanos, pero también que ese estatismo es ambivalente y va acompañado de tensión entre, de un lado, una elevada demanda de servicios y políticas sociales y, de otro, actitudes escépticas o reticentes hacia el sistema fiscal. La experiencia de la Gran Recesión reforzó estos rasgos de la opinión pública, al mantenerse estable el apoyo a la intervención del Estado y a los servicios públicos (aunque empeorasen las valoraciones de su funcionamiento) al mismo tiempo que se acentuaban las actitudes críticas hacia los impuestos (véase Calzada y Del Pino, 2015, 2019, que proporcionan abundantes referencias).

Aunque ya han aparecido estudios dedicados a evaluar las consecuencias políticas de la COVID-19 (o de su primera ola), pocos han prestado atención al cambio de las actitudes sobre el Estado del bienestar. Se han encontrado indicios de que en España la confianza en el sistema sanitario ha aumentado (Bartolomé et al., 2021); de que, a diferencia de en Italia, Holanda y Alemania, no hay efectos sobre el apoyo a la expansión del gasto en sanidad y en protección social ni sobre la percepción de la presión fiscal (Daniele et al., 2020a; también Ares et al., 2021); y de que en algunos aspectos (las valoraciones de la efectividad del Estado y de la eficiencia de las políticas de bienestar, la percepción de que ya no hay margen para subir los impuestos) se ha producido una polarización en función de la ideología, que es mayor en España que en Alemania o Suecia (Ares et al., 2021). Investigaciones sobre otros países arrojan resultados dispares: estabilidad (Curtice et al., 2020 sobre Gran Bretaña); crecimiento del apoyo a la asistencia sanitaria pública y al subsidio por desempleo (Rees-Jones et al., 2020, sobre EE. UU.); estabilidad en algunas actitudes y mejora en otras (Busemeyer, 2021, sobre Alemania); y polarización partidista e ideológica (Gadarian et al., 2021, sobre EE. UU.)¹.

Sobre el trasfondo del conocimiento acumulado sobre las actitudes hacia el Estado del bienestar en España y de estas primeras investigaciones sobre el impacto de la COVID-19, trataremos de averiguar si la pandemia ha consolidado el patrón de opinión prevaleciente en nuestro país o ha

¹ En cambio, estudios sobre otras epidemias de menor alcance encontraron disminución de la propensión a considerar al Estado responsable de proporcionar atención sanitaria (Jensen y Naumann, 2016) y de la confianza en el sistema de salud (Aksoy et al., 2020), aunque limitada en el primer caso a las personas de derechas y en el segundo a quienes estaban en sus “años impresionables” (18-25 años) en el momento de la epidemia.

supuesto un cambio de tendencia. Para ello, usaremos las encuestas sobre Opinión Pública y Política Fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), centrándonos especialmente en las de 2019, cuyo trabajo de campo se hizo en septiembre y octubre de ese año, y 2020, realizada durante el mes de julio. Su comparación permite capturar el impacto de la primera ola de la pandemia sobre varias dimensiones de las opiniones de los ciudadanos sobre los servicios públicos, el papel del Estado y los impuestos. Completaremos esta información con la que proporciona el barómetro de marzo de 2021, que contiene preguntas sobre la suficiencia de los recursos invertidos en servicios y sobre la atribución de responsabilidad al Estado por el bienestar de los ciudadanos y debería captar el impacto de las tres primeras olas de la COVID-19.

¿QUÉ CAMBIÓ EN LA OPINIÓN PÚBLICA?

Los servicios públicos

En las encuestas que usamos no se mide directamente la importancia atribuida por los ciudadanos a los servicios públicos. Tomaremos la frecuencia con que se habla de su funcionamiento como indicador de su saliencia, es decir, de la atención e interés que suscitan. Su evolución temporal en los últimos quince años arroja como balance un gran aumento del porcentaje de personas que declaran hablar con mucha o bastante frecuencia sobre los servicios públicos (desde 42% en 2005 a 70% en 2020). La mayor parte de este aumento se localiza en dos momentos, con subidas de trece puntos en cada uno: el período 2009-2012, coincidente con la crisis económica y el recorte del gasto público, y la abrupta variación entre 2019 y 2020. En general, es esperable que en situaciones de crisis se concederá más importancia a los servicios públicos y el aumento de la frecuencia de conversación sobre ellos durante los primeros meses de la pandemia, el cambio más brusco registrado desde que existen datos, confirma esta expectativa.

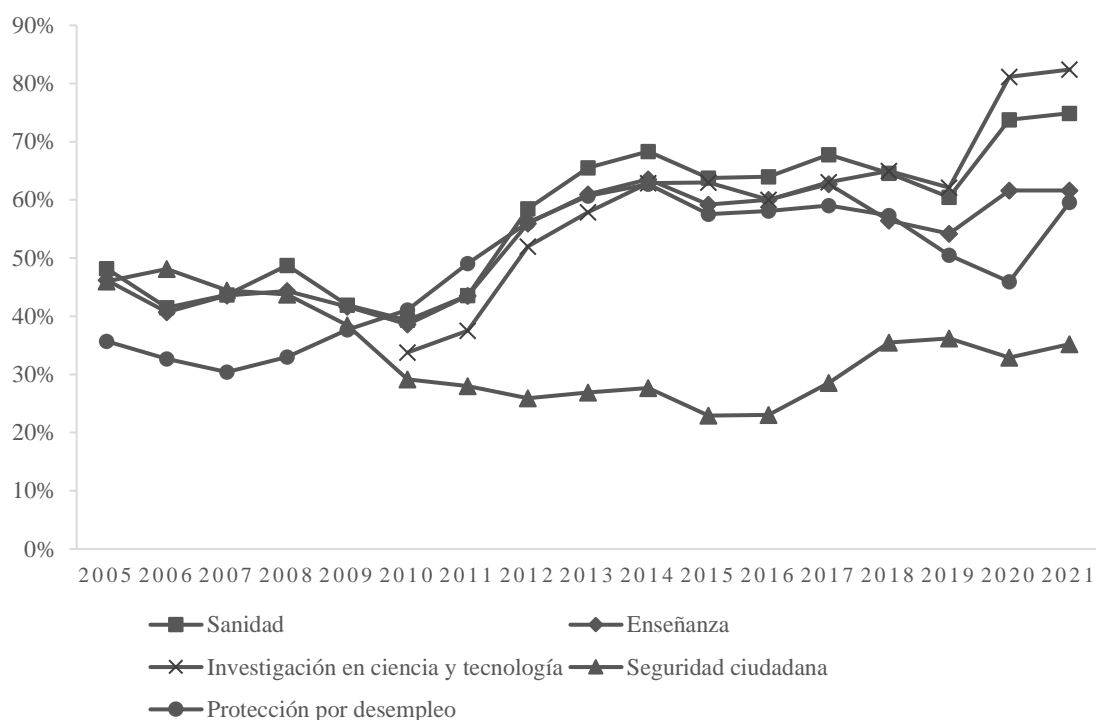
La mayor saliencia de los servicios públicos va acompañada de la demanda de inversión de más recursos en ellos, pero esa demanda no es generalizada, sino que se focaliza en los servicios más relacionados con las necesidades generadas por la pandemia. Así lo muestra la información sobre la suficiencia percibida de los recursos que se dedican a distintas políticas. De las áreas de política más relacionadas con la pandemia (gráfico 1), la única en la que, entre 2019 y 2021, apenas ha habido cambio es la seguridad ciudadana, cuya inclusión en este grupo es quizás cuestionable; sí aumenta el porcentaje de personas que consideran que se dedican muy pocos recursos a sanidad (14 puntos), investigación en ciencia y tecnología (20 puntos), protección por desempleo (9 puntos) y enseñanza (7 puntos)². Aparte de estas áreas, sólo hay otra en la que se encuentra un incremento importante: cultura (8,5 puntos).

Parece, pues, que la demanda (implícita) de más gasto se concentra en políticas muy afectadas por la pandemia, bien porque hacen frente a los problemas más acuciantes que ésta plantea (los sanitarios, los económico-laborales y los relativos a la adaptación del sistema educativo al confinamiento y a las posteriores restricciones a la presencialidad) o porque se aprecia que han sido muy damnificadas por las medidas adoptadas para combatirla en el contexto del estado de

² En general, hay aumento entre 2019 y 2020 y estabilidad entre 2020 y 2021. La única excepción es la protección por desempleo, con una pequeña disminución entre 2019 y 2020 y un pronunciado aumento entre 2020 y 2021, que seguramente refleja la creciente visibilidad de los efectos económico-laborales de la pandemia a medida que ésta se prolongaba. Las áreas con mayor escasez percibida de recursos son las mismas en las que, según el barómetro de marzo de 2021, hay más resistencia a aceptar recortes si fuese imprescindible reducir el gasto público: sanidad (95% en contra), enseñanza (92%), investigación (90%) y protección por desempleo (88%).

alarma (cultura). Ampliando la perspectiva temporal, se observa una importante diferencia entre las dos grandes crisis ocurridas desde principios de siglo: en ambas creció la percepción de que se invertía demasiado poco en servicios públicos, pero durante la pandemia esa percepción se refiere sólo a algunos sectores, respondiendo a la aparición de necesidades extraordinarias muy localizadas, mientras que durante la Gran Recesión se aplicaba a muchas áreas, como reflejo del aumento de algunas necesidades (desempleo, servicios sociales) y de recortes generalizados que afectaban a casi todas las políticas.

Gráfico 1
Valoración de los recursos dedicados a financiar los servicios públicos más relacionados con la pandemia, 2005-2021. Porcentaje de personas que responden “muy pocos” (en 2021, “demasiado pocos”)



La información sobre la satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos que contienen estas encuestas refuerza esta interpretación. La mayoría de los servicios más directamente implicados en la respuesta a la pandemia han visto aumentar entre 2019 y 2020 el porcentaje de personas muy o bastante satisfechas con su funcionamiento (ocho puntos sanidad, diez servicios sociales y seguridad ciudadana), mientras que apenas ha habido cambios en la satisfacción con los demás servicios³. Esto contrasta con lo ocurrido durante la crisis anterior, cuando los recortes del gasto se tradujeron en la opinión pública tanto en conciencia de la escasez de medios como en una aguda disminución de la satisfacción en la mayoría de las áreas.

Los cambios que hemos señalado hasta ahora se podrían deber simplemente a diferencias en la composición de las muestras de las encuestas, relacionadas a su vez con el hecho de que la de 2019 fue presencial y las de 2020 y 2021 fueron telefónicas. Sin embargo, en general no es así: a igualdad de sexo, edad, nivel de estudios, situación laboral y sector de empleo del entrevistado o la persona de referencia en el hogar e ideología, sigue habiendo aumentos considerables en la frecuencia de conversación sobre servicios públicos (7 puntos porcentuales) y en la percepción

³ A diferencia de las encuestas de otros años, en la pregunta aplicada en 2020 se contempla la opción de respuesta “regular”, que hemos sumado a “poco” y “nada”.

de insuficiencia en los recursos dedicados a sanidad (11 puntos), ciencia y tecnología (13 puntos) y, en medida bastante modesta, enseñanza (4 puntos)⁴.

En suma, la experiencia de la pandemia ha producido en la opinión pública una apreciación del papel de los servicios públicos, expresada en su mayor saliencia, en la demanda de inversión de más recursos (implícita en la opinión de que los disponibles son insuficientes) y en el hecho de que, a pesar de que se percibe que están faltos de medios, la satisfacción con su funcionamiento ha aumentado. Sin embargo, también hemos visto que los cambios registrados afectan casi exclusivamente a un pequeño número de áreas de política, lo cual plantea el interrogante de si se ha asistido tan sólo al reconocimiento de la existencia de necesidades especiales en un momento de crisis excepcional y transitorio o se ha producido una revalorización general de “lo público”, que podría augurar un reforzamiento del apoyo al Estado de bienestar.

Servicios, impuestos y el papel del Estado

Para dar una respuesta tentativa a esta cuestión podemos acudir a dos indicadores de estatismo: la atribución al Estado de responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos y la preferencia por mejorar los servicios públicos, aunque esto requiera subir los impuestos, o por bajar los impuestos, aunque para ello haya que reducir los servicios o prestaciones públicos.

Según el barómetro de marzo de 2021, el 70% de los españoles piensan que el Estado debe ser responsable del bienestar de todos los ciudadanos, 13% creen que debe serlo del bienestar de los más desfavorecidos y otro 13% consideran que los ciudadanos se deben responsabilizar de su propio bienestar. Aunque el dato comparable más reciente es de 2011, llama la atención que el peso de las actitudes más estatistas se ha mantenido estable: 67% o 70% según dos encuestas de 2011, 74% en 2008, 66% en 2006 y 68% en 2005; en los años 80 y 90 del siglo XX se registraban cifras algo más bajas⁵. Además, el peso de las actitudes más liberales o individualistas (los ciudadanos son responsables de su propio bienestar) es algo mayor en 2021 que en la década anterior, cuando oscilaba en torno al 9%. No parece, por tanto, que la experiencia de la pandemia haya transformado las opiniones sobre el papel del Estado, que se inclinan abrumadoramente hacia un estatismo universalista, pero no en mayor medida que en el pasado reciente.

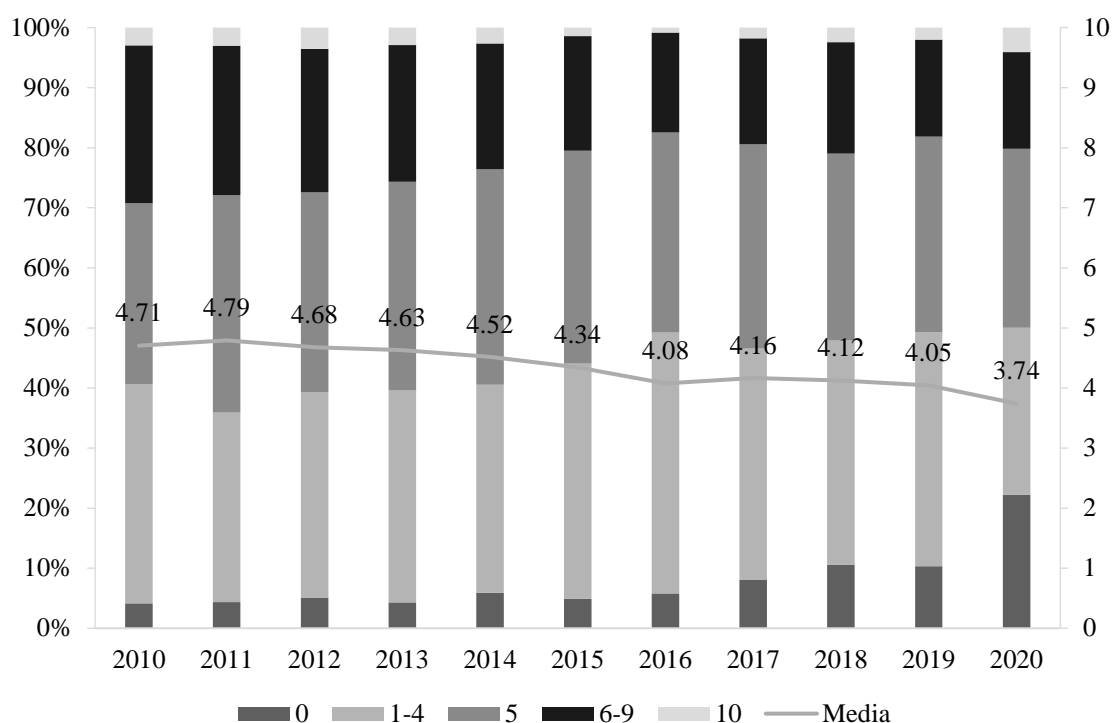
Los españoles suelen ser más ambivalentes cuando la provisión de servicios por el Estado se pone en relación con la necesidad de pagar impuestos para sostenerlos. El gráfico 2 muestra la evolución de las preferencias sobre mejora de los servicios y pago de impuestos, en una escala de 0 a 10. Entre 2019 y 2020 la media cae tres décimas, moviéndose hacia la predilección por mejorar los servicios. Sin embargo, reparando en qué cambios de la distribución provocan este desplazamiento de la media se aprecia, por un lado, que se ha mantenido casi inalterada la división de la población en tres grupos: los proclives a la mejora de los servicios, valores 0 a 4, que suponen alrededor de 50% en ambos años; los favorables a la bajada de los impuestos, valores 6 a 10, que pasan del 18% al 20%; y los que tienen una posición neutral, valor 5, que

⁴ Para comprobar esto, se han estimado modelos de regresión con los datos de 2019 y 2020, que no se presentan por falta de espacio pero están a disposición del lector interesado. Las variables de control no incluyen la relación con la actividad, porque análisis previos mostraron que era redundante. Tampoco la ocupación y la rama de actividad, porque los datos de las dos encuestas utilizadas no son comparables, debido que el CIS ha cambiado el modo en que se recoge información sobre estas variables, apartándose del procedimiento (pregunta abierta y codificación detallada en oficina) que se aplicaba desde 1993.

⁵ Los datos de 2021 proceden del estudio 3.313 del CIS y los de 2005 a 2011 de la serie A.3.07.05.009 de su Banco de Datos; Alvira et al. (2000, 67) remontan el análisis a los años 80 y 90, usando una pregunta algo diferente.

disminuyen apenas tres puntos, del 33% al 30%. Pero, por otro lado, esta continuidad ha ido acompañada de movimientos dentro de cada grupo: las opiniones a favor de la mejora de los servicios públicos se intensifican, concentrándose más en el valor 0 (acuerdo pleno con “mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos”) a costa de los valores 1 a 4; en una escala menor, sucede algo similar entre los partidarios de bajar los impuestos, al duplicarse el porcentaje de quienes puntúan 10 (es decir, se decantan sin ambages por “pagar menos impuestos aunque haya que reducir los servicios”). Durante la pandemia no ha habido un desplazamiento general de la opinión pública hacia posiciones estatistas (que sí se produjo a mediados de la década anterior), sino una radicalización de las preferencias de quienes ya eran favorables (o contrarios) a la expansión del Estado del bienestar.

Gráfico 2
Escala de valoración (0-10) del aumento de los impuestos para tener mejores servicios públicos y prestaciones sociales, 2010-2020



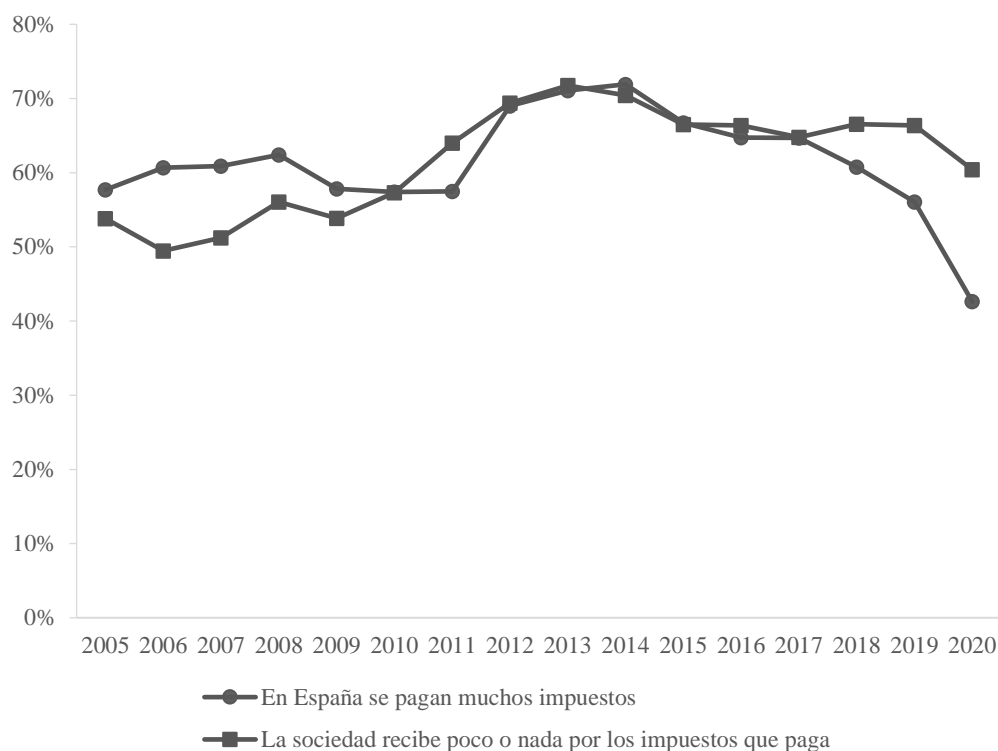
Esto se hace todavía más evidente cuando se toma en consideración las diferencias de composición sociodemográfica e ideológica de las muestras de las encuestas de 2019 y 2020. En ese caso, ya no se encuentra una disminución de la media que apunte a un balance más favorable a mejorar los servicios públicos pagando más impuestos, sino que los movimientos hacia los extremos que habíamos detectado se neutralizan completamente entre sí. Pues sigue existiendo un aumento significativo de las opiniones extremas: el porcentaje de personas que se sitúan en el extremo más favorable a mejorar los servicios aumenta nueve puntos y el de las que se colocan en el más propicio a rebajar los impuestos sube tres. Como veremos, esta mayor polarización de las opiniones, sin cambio global, está relacionada con el hecho de que distintos segmentos ideológicos modifican sus opiniones en sentidos opuestos.

Antes de volver sobre esta divergencia, veremos cómo cambian el juicio de los españoles acerca de la función de los impuestos, su percepción de la presión fiscal y su evaluación del balance entre impuestos pagados y servicios recibidos por la sociedad, aspectos todos ellos que pueden

arrojar más luz sobre el nivel de apoyo que da a la intervención del Estado la opinión pública. Para empezar, de 2019 a 2020 aumenta siete puntos el porcentaje de quienes creen que la función principal que cumplen los impuestos es permitir al Estado prestar servicios públicos, disminuyendo en igual medida quienes ven en los impuestos una obligación cuya justificación no está clara. Estos cambios se mantienen aunque se tenga en cuenta las diferencias de composición de las muestras de cada encuesta. La pandemia ha avivado la conciencia del papel de los impuestos en el sostenimiento del Estado de bienestar, llevándola al nivel más alto registrado por las encuestas del CIS. Esto contrasta con lo ocurrido tras la última crisis económica, cuando la combinación de aumento de la presión fiscal y recorte de los servicios se tradujo en un alza de las actitudes escépticas hacia la funcionalidad de los impuestos.

También cambia entre 2019 y 2020 la percepción de la presión fiscal: cae trece puntos el porcentaje de personas que creen que en España se pagan muchos impuestos, situándose en el 43%, mientras que las respuestas “regular” y “poco” crecen hasta sumar 57% (gráfico 3). Desde que el CIS hace esta pregunta (1985), es la primera vez que quienes creen que la presión fiscal es alta son menos que los que piensan que es moderada o baja. Este brusco cambio es aún más notable teniendo en cuenta que en años anteriores la opinión de que se pagan muchos impuestos ya había ido perdiendo peso hasta recuperar los niveles anteriores a la Gran Recesión. Incluso teniendo en cuenta las variables de control, la creencia de que se paga “mucho” ha disminuido nueve puntos porcentuales a raíz de la pandemia.

Gráfico 3
Percepción de la presión fiscal y valoración sobre las contraprestaciones que recibe la sociedad por los impuestos que paga al Estado, 2005-2020



De igual modo, los datos reflejan cierta mejora en la valoración de las contraprestaciones que recibe la sociedad por los impuestos que paga (gráfico 3): de 2019 a 2020 disminuye seis puntos el porcentaje de quienes creen que se recibe poco o nada (cuatro al tener en cuenta las variables de control). Aunque siguen siendo mayoría los que opinan que la sociedad se beneficia poco o

nada de lo que paga (60%), este cambio no es despreciable: entre 2013 y 2019, las valoraciones positivas sólo recuperaron cinco de los veintidós puntos que habían perdido durante la crisis; la experiencia de la primera ola de la COVID-19 las ha hecho subir otros seis puntos en pocos meses y no parece descabellado conjeturar que esa tendencia se puede haber acentuado a medida que la pandemia se prolongaba.

Empezamos este apartado preguntándonos si, más allá de las opiniones relativas a los servicios directamente relacionados con la pandemia, ésta había dado lugar a una “revalorización de lo público”. Los resultados apuntan a una respuesta matizada, que separe el plano de las percepciones, más pegadas a la experiencia inmediata, y el de las preferencias, más vinculadas al sistema de valores al que se adhiere cada individuo. Aunque la frontera entre ambos niveles es difusa (y sobre ello volveremos en breve), parece que la COVID-19 ha mejorado ciertas percepciones y evaluaciones (sobre la funcionalidad y volumen de los impuestos que pagan los ciudadanos y sobre lo que el Estado les da a cambio), pero no ha alterado sustancialmente las orientaciones valorativas más profundas, expresadas tanto en la atribución de responsabilidades por el bienestar como en las preferencias sobre políticas sociales e impuestos.

La pandemia ha hecho más visibles la utilidad y los beneficios de los impuestos y ha llevado a reconsiderar la carga que supone su pago, opiniones de carácter más pragmático y quizás más circunstancial. Sin embargo, al menos hasta donde llegan nuestros datos, no ha provocado un crecimiento generalizado de la ya sólida base de apoyo del Estado del bienestar: quienes ya eran estatistas lo son ahora más intensamente, pero no hay más estatistas que antes.

¿QUIÉN CAMBIÓ SUS OPINIONES?

No disponemos de datos de panel que permitan identificar cambios en el nivel individual. Como alternativa, hemos hecho análisis en los que, en lugar de atender a los movimientos de la opinión pública en su conjunto, dando por supuesto que han sido homogéneos, se indaga cómo varían en el tiempo las actitudes de diferentes categorías sociales y segmentos ideológicos⁶.

Empezando por la frecuencia de conversación sobre los servicios públicos, entendida como indicador de su saliencia, la pandemia hizo que los españoles en general hablasen con mayor frecuencia sobre los servicios públicos y este incremento fue bastante similar para todos, con independencia de sus características sociales y su ideología, manteniéndose, por tanto, las diferencias preexistentes.

Ocurre algo parecido con la valoración de la necesidad de dedicar más recursos a sanidad y a ciencia y tecnología: sube el número de personas que piensan que se gasta demasiado poco y apenas hay grupos cuya valoración sufra un cambio distintivo. Sólo hay algunas diferencias por nivel de estudios en el aumento de la percepción de insuficiencia del gasto en sanidad (es mayor en los niveles educativos más altos) y algunas diferencias por ideología en cuanto al gasto en ciencia y tecnología, que aminoran las diferencias entre grupos ideológicos que existían previamente (el segmento que menos cambia es la izquierda, justamente el que en 2019 era más sensible a la escasez de recursos para ciencia).

⁶ Concretamente, usando los datos de 2019 y 2020, hemos estimado modelos de regresión que incluyen la variable año y la interacción entre ésta y las variables sociodemográficas, laborales e ideológicas ya mencionadas. Por falta de espacio, no presentamos detalladamente los resultados de estos análisis, sino que nos limitamos a identificar patrones diferenciales de cambio y valorar si éstos agudizan o aminoran las diferencias entre grupos que existían antes de la pandemia.

Estos resultados sugieren que la pandemia ha dado lugar a una suerte de aprendizaje colectivo de la opinión pública española que, además de aumentar la saliencia de los servicios públicos, hizo más visible la insuficiencia de medios en algunos de ellos. También lo ha habido en lo que se refiere a la funcionalidad de los impuestos, pero en este caso está circunscrito a determinados segmentos sociales. Algunos de los sectores que adoptaban actitudes más cínicas sobre para qué sirven los impuestos (como las personas con niveles de estudios más bajos) han adquirido mayor conciencia de su función en el aseguramiento de la capacidad del Estado para proporcionar prestaciones siempre muy demandadas, pero que la pandemia ha convertido en esenciales. Se ha atenuado así un poco la tensión – o ambivalencia – entre la extendida opinión de que se debería gastar más en servicios públicos y la idea estereotipada de que se paga impuestos sin saber para qué.

Hasta aquí apenas se han vislumbrado cambios diferenciales según ideología y los que había apuntaban a una reducción de las discrepancias preexistentes. Algo muy diferente ocurre con las preferencias por mejorar los servicios o bajar los impuestos: el giro favorable a mejorar los servicios públicos es común a prácticamente todas las categorías sociodemográficas y laborales, pero hemos encontrado grandes diferencias por ideología. Mientras que las personas de izquierda y centro-izquierda acentúan su orientación estatista, las de centro, centro-derecha y derecha y las no ubicadas intensifican su mayor liberalismo (o conservadurismo) en materia fiscal. La misma pauta reaparece, de forma atenuada, para la percepción de la presión fiscal: a igualdad de otras variables, el porcentaje de ciudadanos que creen que en España se pagan muchos impuestos disminuye en la izquierda y el centro-izquierda, pero no cambia en el centro, el centro-derecha y los no posicionados ideológicamente, e incluso aumenta en la derecha. Se puede todavía vislumbrar esa pauta, aunque ya muy difuminada, para la valoración de lo que la sociedad recibe por los impuestos que paga: hay una mejora casi generalizada, pero las personas posicionadas en la derecha son ajenas a ella.

Todo esto sugiere que la experiencia de la pandemia ha tenido un efecto polarizador en algunas dimensiones de la opinión, agudizando las diferencias entre distintos segmentos ideológicos. Como ya habíamos apuntado en la sección anterior, se han intensificado las discrepancias en las preferencias sobre el Estado del bienestar (estatismo vs. liberalismo), ligadas a orientaciones de valor aún más básicas (colectivismo vs. autosuficiencia). Además, estas preferencias divergentes parecen haber condicionado el modo en que han cambiado durante la pandemia las percepciones sobre los impuestos en mayor medida de lo que sugería el análisis a nivel agregado, lo cual obliga a subrayar que la frontera entre percepciones y preferencias es difusa y permeable.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El análisis de las encuestas sobre Opinión Pública y Política Fiscal del CIS que hemos llevado a cabo pone de manifiesto que el impacto de la COVID-19 sobre las actitudes de los españoles hacia el Estado del bienestar y los servicios públicos no se puede caracterizar mediante una fórmula sumaria como “revaloración de lo público”. Distintas dimensiones de esas actitudes han cambiado de modo diferente y los ciudadanos exhiben bastante capacidad para separar ámbitos de política distintos y establecer prioridades.

Hay indicios de un amplio respaldo a las políticas y servicios que responden directamente a los desafíos de la pandemia, se ha atenuado el cinismo sobre la función social de los impuestos y, aunque con importantes diferencias por ideología, ha mejorado la valoración de la contraprestación que la sociedad recibe por ellos y se ha reajustado a la baja la percepción de la presión fiscal. Sin embargo, no sería apropiado interpretar estos cambios como síntomas de una

demanda generalizada de expansión del Estado del bienestar o de una transformación radical del núcleo valorativo sobre el que se sustentan las preferencias en materia de políticas de bienestar y fiscalidad. Ni ha aumentado el número de “estatistas” ni se ha reducido el de “liberales” o “individualistas”, sino que las preferencias de unos y otros se han intensificado, dando lugar a una mayor polarización de base ideológica. Si hubiese que caracterizar sintéticamente el modo en que la COVID-19 ha afectado a las actitudes de los españoles sobre el Estado del bienestar, podríamos decir que ha traído consigo un sólido consenso pragmático en la respuesta a necesidades extraordinarias y un mayor disenso ideológico en las preferencias de fondo. O, a riesgo de incurrir en un oxímoron: consenso polarizado.

REFERENCIAS

- Aksoy, C.G., Eichengreen, B., Saka, O. (2020). *The political scar of epidemics*. IZA Working paper n° 13351
- Alvira, F., Garíz López, J., Delgado, M.L. (2000). *Sociedad, impuestos y gasto público. La perspectiva del contribuyente*. Centro de Investigaciones Sociológicas
- Ares, M., Bürgisser, R., Häusermann (2021). Attitudinal polarization towards the redistributive role of the state in the wake of the COVID-19 crisis. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 31(sup1): 41-55
- Bartolomé, E., Coromina, L., Dülmer, H. (2021). Valores bajo presión: estudio preliminar sobre el cambio de valores ante la crisis de la COVID-19 en España. *Revista Española de Ciencia Política*, 55: 143-165
- Busemeyer, M.R. (2021). *Health care attitudes and institutional trust during the Covid-19 crisis: Evidence from the case of Germany*. Cluster of Excellence “The Politics of Inequality”. Working paper no. 1
- Calzada, I., Del Pino, E. (2015). Preferencias sobre el Estado de bienestar y satisfacción con las políticas sociales en el Estado autonómico (1985-2013). En C. Torres (Ed.), *España 2015: situación social* (pp. 1081-1092). Centro de Investigaciones Sociológicas
- Calzada, I., Del Pino, E. (2019). *En lo bueno y en lo malo. Las opiniones de los españoles hacia las políticas sociales durante la crisis y más allá*. VIII Informe FOESSA, documento de trabajo 4.5. <https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/05/4.5.pdf>
- Curtice, J., Abrams, D., Jessop, C. (2020). *Coronavirus and public attitudes: Plus ça change?* National Center for Social Research.
- Daniele, G., Mantinangeli, A., Passarelli, F., Sas, W., Windsteiger, L. (2020). *Wind of change? Experimental survey evidence on the Covid-19 shock and socio-political attitudes in Europe*. CESifo Working paper, n°. 8517
- Gadarian, S.K., Goodman, S.W., Pepinsky, T.B. (2021). Partisanship, health behavior, and policy attitudes in the early stages of the COVID-19 pandemic. *PLoS ONE*, 16(4):e0249596. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249596>
- Jensen, C., Naumann, E. (2016). Increasing pressures and support for public healthcare in Europe. *Health Policy*, 120: 698-705
- Rees-Jones, A., D’Attoma, J., Piolatto, A., Salvadori, L. (2020). *Covid-19 changed tastes for safety-net programs*. NBER working paper no. 27865. <http://www.nber.org/papers/w27865>